

Cesión de datos para control de blanqueo de capitales. Informe 6/2007

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación a las entidades financieras, y en particular a las que realizan actividades de banca a distancia, de los datos relacionados con la afiliación de los clientes que pretenden establecer relaciones de negocio con dichas entidades a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo único del real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, que establece determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador.

Tal y como se indica en la documentación remitida y en la solicitud de consulta, la transmisión de datos planteada en la misma constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Respecto de las comunicaciones de datos, el artículo 11.1 de la Ley dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, no será necesario el consentimiento en caso de que una norma con rango de Ley otorgue cobertura a la cesión planteada, tal y como dispone el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

Como se señala en la consulta, el artículo 5.3 del Real decreto 925/1995, en la redacción dada al mismo por el Real decreto 54/2005 dispone que “En el momento de establecer relaciones de negocio, los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial. Asimismo, adoptarán medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información”

Añade el precepto citado en su párrafo tercero que “los sujetos obligados deberán aplicar medidas adicionales de identificación y conocimiento del cliente para controlar el riesgo de blanqueo de capitales en las áreas de negocio y actividades más sensibles, en particular, banca privada, banca de correspondencia, banca a distancia, cambio de moneda, transferencia de fondos con el exterior o cualesquiera otras que determine la Comisión de prevención

del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda podrán aprobarse orientaciones para las distintas áreas de negocio y actividades”.

La citada disposición carece de rango suficiente a los efectos previstos en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999. No obstante, no debe olvidarse que el artículo 3.1 de la Ley 19/1993, en la redacción resultante de la disposición adicional 1.3 de Ley 19/2003, de 4 julio, dispone que “Los sujetos mencionados en el artículo precedente quedarán sometidos a las siguientes obligaciones (...) Exigir, mediante la presentación de documento acreditativo, la identificación de sus clientes en el momento de entablar relaciones de negocio, así como de cuantas personas pretendan efectuar cualesquiera operaciones, salvo aquellas que queden exceptuadas reglamentariamente. Los requisitos para la identificación de los clientes que no hayan estado físicamente presentes en el momento del establecimiento de la relación de negocios o de la ejecución de operaciones se determinarán reglamentariamente”

Asimismo, añade el mencionado precepto que “Los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial”, concluyendo expresamente que “Asimismo, adoptarán medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información”.

Por otra parte, el artículo 3.6 de la propia Ley impone a los sujetos obligados el deber de “No revelar ni al cliente ni a terceros que se han transmitido informaciones al Servicio Ejecutivo con arreglo al apartado 4 anterior, o que se está examinando alguna operación por si pudiera estar vinculada al blanqueo de capitales”.

El carácter de sujeto obligado de las entidades de crédito queda recogido expresamente en el artículo 2.1 a) de la propia Ley 19/1993.

Como se ha indicado, el artículo 3.1 de la Ley 19/1993 impone el deber de que por los sujetos obligados se adopten medidas dirigidas a comprobar la veracidad de la información de los futuros clientes, reproduciendo el artículo 5.3 de su Reglamento de desarrollo este deber legal, que se particulariza, siempre en desarrollo de lo exigido por la Ley objeto de desarrollo en la necesidad de adopción de medidas adicionales en los sectores que son considerados como más sensibles, como sucedería en el caso de la banca electrónica.

En consecuencia, el deber de realización de actividades de verificación de la actividad empresarial o profesional de los futuros clientes de las entidades

financieras deriva directamente de lo exigido por la Ley 19/1993, pudiéndose considerar amparada en la misma, en conexión con el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 la comunicación planteada.

De este modo, no resultaría necesario que las entidades financieras recabasen el consentimiento del futuro cliente para la consulta de los datos relativos a su afiliación, que permitan verificar la efectiva actividad empresarial o profesional desarrollada por aquél. Del mismo modo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.6 de la Ley 19/1993 no sería posible que las entidades informasen al interesado acerca del tratamiento de sus datos con fines de prevención del blanqueo de capitales, sin perjuicio de que se informe a dichos clientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de la obligación legal de la entidad de verificar los datos relacionados con la actividad profesional o empresarial del cliente.

En relación con esta cuestión, la Agencia Española de Protección de Datos ya ha tenido la ocasión de indicar, en informe de 1 de agosto de 2005, la existencia de determinados límites al deber de información al afectado en los supuestos en los que la Ley impone una prohibición de que aquél pueda conocer acerca del tratamiento. Así, en el citado informe se señalaba, en relación con la aplicación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, lo siguiente:

“Esta Agencia ha venido indicando que esta prohibición legal eximirá a los sujetos obligados de dar cumplimiento al deber previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con el tratamiento y la comunicación efectuados al amparo de lo dispuesto en la Ley 12/2003. Del mismo modo, la prohibición establecida en dicha norma impediría a las personas o entidades obligadas atender las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley Orgánica 15/1999.

En este sentido, recuerda el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, tras reconocer la existencia de un derecho fundamental y autónomo a la protección de datos de carácter personal, que “la Constitución ha querido que la Ley, y sólo la Ley, pueda fijar los límites a un derecho fundamental. Los derechos fundamentales pueden ceder, desde luego, ante bienes, e incluso intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido”.

En el presente supuesto, la restricción expresamente impuesta por el legislador a la posibilidad de revelación del estudio y comunicación de las operaciones a las que se refiere el artículo 4 de la Ley 12/2003 implicará una limitación al haz de derechos y facultades impuesto por la Ley Orgánica 15/1999 que cumplirá lo dispuesto en la doctrina constitucional citada, respetándose lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y el propio derecho fundamental.

Por este motivo, no será preciso dar cumplimiento en este supuesto al deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 ni otorgar al interesado el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los ficheros creados en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2003, de modo que cabrá rechazar las pretensiones ejercitadas en este sentido, invocándose, a fin de justificar la denegación, lo dispuesto en el artículo 4.1 g) de la Ley 12/2003.”

En todo caso, debe recordarse que el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el artículo 4.2 que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

Ello implica que las entidades financieras únicamente podrán utilizar los datos a cuya cesión se refiere el presente informe con la finalidad de comprobar la efectividad de la actividad profesional o empresarial efectivamente declarada por quien pretenda mantener un vínculo comercial con la misma, sin poder aplicar los datos a ninguna otra finalidad, dado que la finalidad de la cesión aparece expresamente recogida en el artículo 3.1 de la Ley 19/1993.

En consecuencia, y en respuesta a la concreta cuestión planteada en la consulta, no será preciso recabar el consentimiento del interesado para la comunicación de sus datos de afiliación, con indicación de la actividad desarrollada por aquél, a las entidades financieras, al encontrarse dicha cesión amparada por el artículo 3.1 de la Ley 19/1993, si bien las entidades única y exclusivamente podrán aplicar la información obtenida al cumplimiento del deber impuesto por el citado precepto.

